

bre los recursos, justificar la construcción de viviendas en lugares arriesgados constituye la diferencia entre un buen susto y una catástrofe. La tentación de construir bajo montañas y laderas debido al crecimiento de las ciudades es muy alta, sin embargo la normativa no prohibió la construcción bajo la Cordillera del Bálsamo a pesar de las protestas de algunos ciudadanos y asociaciones ecologistas.

Se espera un incremento de la población capitalina por la migración rural generada por los terremotos, que va a ser responsable de una mayor presión social sobre los recursos en San Salvador; por lo que habrá que hacer un esfuerzo en el ordenamiento de la ciudad en el futuro.

Organización social ante desastres

El Comité de Emergencia Nacional-COEN es un ente gubernamental permanente que tiene su base jurídica en el Decreto 498 del 8 de abril de 1976. Su objetivo de origen es el de prevenir daños y entre sus atribuciones, organizar y dirigir en forma coordinada las acciones tendientes a evitar desastres o calamidades públicas y disminuir sus efectos». Éste es el encargado de velar por la organización de la ayuda en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales tales como huracanes, inundaciones, erup-

ciones volcánicas y terremotos. El Sistema Nacional de Emergencia (SISNAE), es la parte operativa del COEN.

Sin embargo, la situación se restringe prácticamente a los momentos de emergencia sin incidir en la previsión de las catástrofes; aún así, el SISNAE fue muy criticado por los medios de comunicación en cuanto al manejo de la crisis provocada por los terremotos. El gobierno a su vez creó inmediatamente CONASOL, la Comisión Nacional de Solidaridad, que fue conformada por destacados miembros de la empresa privada. Ambas instituciones centralizaron la gestión de la crisis creándose una dirección bicéfala a la que no estaban invitados ni la sociedad civil ni las alcaldías. En tal sentido la falta de prevención multiplicó los efectos sociales de los terremotos, la ineptitud, la improvisación y la politización de la crisis retardó y dificultó la actuación inmediata para el rescate de posibles supervivientes, así como el amparo para los damnificados.

El SISNAE implica una red departamental y local. Esta red, sin embargo no fue utilizada, iglesias, alcaldías, y organizaciones no gubernamentales, que trabajan directamente con las comunidades no fueron la base del reparto de la ayuda internacional, que para mayor desconuelo, era trasladada innecesariamente de Comalapa a la Feria Internacional en San Salvador y de ahí a los distintos lugares de re-

cepción, perdiéndose un tiempo valioso como resultado de la burocracia.

La improvisación ha estado presente en todos los escenarios de la crisis, lo que pudo constatarse en las Colinas 1 y II de Santa Tecla, en el departamento de la Libertad, símbolo de la tragedia donde primó el caos en las primeras horas. Los cientos de voluntarios que acudieron a la llamada de petición de ayuda a través de la radio y la televisión excavaban tierra sin ningún plan, en total desorden, quiénes acudieron, porque no existen en el país equipos técnicos ni humanos especializados en rescates de estas características a pesar de encontrarnos en un territorio de alto riesgo sísmico. Hasta la llegada de los socorristas mexicanos, los detectores de vida tawaineses y los perros adiestrados por españoles, no hubo mayor técnica que la de la buena voluntad de las personas solidarias.

La desesperación ante la tragedia y la impotencia de los cientos de ciudadanos que allí se encontraban sin di-



Terremoto en las Colinas, La Libertad

El Salvador, 13 de Enero de 2001

\$ 1.800 millones en daños y pérdidas

Foto: Comité Comandante de Salvamento



Terremoto: Miembros del COEN

El Salvador, 13 de Febrero de 2001

\$ 1.800 millones en daños y pérdidas

Foto: Thierza Rubalbo

rección alguna estallaron frente a la presencia del Presidente de la República. En imágenes sin editar de aquella noche, que no volvieron a transmitirse, fue cuestionado por los afectados por visitar el lugar de la tragedia sin llevar ningún tipo de equipo para remover la tierra que había sepultado más de 400 casas.

El desconcierto y la improvisación se puede ejemplificar con otro hecho ocurrido en los primeros días después del primer terremoto, cuando un grupo de bomberos españoles especializadas en rescates viajaron de un lado a otro del país por tres días, sin haber prestado su colaboración en ningún lugar. Las declaraciones de los frustrados rescatistas salieron en noticieros locales e internacionales, reflejando, sin ninguna duda la inoperancia en la dirección efectiva de la crisis. Es necesario acotar que lo primordial en estos casos de emergencia son los sistemas de prevención de desastres que en esta ocasión como en muchas otras ha tomado al gobierno desprevenido. Conforme ha ido pasando el tiempo se ha desvelado la realidad en cuanto a la prevención de los desastres provocados por los fenómenos naturales en El Salvador. A grandes líneas el país se queda muy atrás, incluso con respecto al resto de países de Centroamérica.

Cuando el Centro de Investigaciones Geotécnicas dio los primeros datos sobre el terremoto del 13 de enero, estimó su intensidad muy por debajo que otros centros de estudios internacionales. Finalmente se adoptó la medida de 7.6 a 7.9 en la escala Richter, disculpando al CIG, por un problema técnico en la medición del sismo. Se demostró en primer lugar que el equipo humano y técnico era insuficiente para evaluar las características sísmicas del país; por ejemplo en Nicaragua, un país centroamericano con

similares condiciones de pobreza cuenta con 50 sismógrafos mientras que El Salvador apenas tiene 7. En estos dos meses los medios de comunicación han entrevistado a expertos extranjeros sobre geología, orografía, vulcanología y sismología. Por su parte el CIG ha visto desaparecer progresivamente a sus especialistas nacionales así como a su plantilla y equipo técnico. Se ha declarado que existen becas para realizar estudios en otros países para estudiar geología, geofísica, hidrología y otras materias. Estas becas no han sido aprovechadas por los estudiantes salvadoreños por distintos motivos.



Foto: Thirza Ruballo

Pero no sólo ha existido poca preocupación por la formación de especialistas, sino que no se han aprovechado las oportunidades para renovar los estudios exhaustivos sobre el sistema de fallas en San Salvador, la ciudad más importante y más poblada del país y que se ve atravesada por multitud de fallas locales.

El Centro de Estudios Jurídicos afirmaba en La Prensa Gráfica, el 5 de febrero de este año, que en 1986 el gobierno del momento acordó la confidencialidad del mapa de fallas bajo la ciudad de San Salvador, con la intención de impedir la pérdida de valor de los bienes inmuebles que se encontraran en peligro latente. Para ellos se trata de una actitud casi homicida y que

demuestra la decisión de optar por el interés privado e inmediato por encima del común y más humano. Si en 1986 ocurrió esto todavía a principios del siglo XXI seguimos sin conocer los capitalinos de forma transparente estos datos que ponen en peligro nuestras residencias y lugares de trabajo. Paradójicamente según Mauricio Funes en su programa televisivo del 26 de febrero, los ciudadanos estadounidenses obtienen esta información de parte de su Embajada, en un ejemplo claro de cómo las instituciones amparan y velan por la vida de sus ciudadanos. ¿Cuándo tendremos entonces un estudio exhaustivo y público sobre nuestro suelo?

La necesidad de conocer nuestros suelos, en especial, los núcleos urbanos más importantes, su comportamiento, y la aceleración en caso de movimientos sísmicos, forma parte de todo un sistema más amplio de prevención ante desastres. Todos estos días se han vertido en los espacios de los medios de comunicación opiniones sobre la necesidad de abandonar la improvisación y cambiarla por una cultura de previsión que disminuya la capacidad de destrucción de los fenómenos naturales.

Realizar de una vez por todas todo un programa integral de prevención implica, desde estudios técnicos de especialistas en relación al suelo, el comportamiento sísmológico, etc, hasta la asunción de todos nosotros de una cultura «sísmica». Este proyecto integral existe planteado al menos sobre papel y además tiene un carácter centroamericano; en el «Plan Regional de Reducción de Desastres-PPRD» y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central-CEPRENAC, fue ratificado por la instancia política más alta de la región, la Reunión de Presidentes en el año 1993, cuyo documento final fue

el «Marco Estratégico por la Reducción de Vulnerabilidad y Desastres en Centroamérica.»

Sorprendentemente el PPRD basa su línea de actuación en la prevención; afirma que las manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza se convierten en desastres debido a la situación socioeconómica de la población. Es decir, los desastres son causados por la actuación de los humanos y por la estructura política y económica de las sociedades centroamericanas. Pero no sólo la población más pobre se ve afectada, también la parte más acomodada sufre los riesgos debido a « la falta de una conciencia o cálculo adecuado en cuanto a los niveles de amenaza y riesgo existente; la falta de adecuadas normas o controles sobre la construcción, de regulaciones sobre el uso del suelo, o la falta de aplicación de éstos» (CEPRENAC).

Vivienda

Hasta el 13 de enero del 2001 El Salvador mantenía un déficit habitacional de más de medio millón de casas; lo cual significa que 2 millones y medio de personas se encontraban sin una vivienda digna, basados en un índice promedio de cinco personas por casa. En los 44 segundos que duró el intenso terremoto de aquel fa-



tídico sábado según datos del COEN, 222 mil 419 viviendas quedaron afectadas por el sismo, de las cuales casi 92 mil quedaron completamente destruidas. Los departamentos más dañados fueron Usulután, La Paz y La Libertad. Casualmente, justo un mes después, otro terremoto relacionado con los fallamientos locales de la zona central del país afectaron con gran intensidad los departamentos de La Paz, Cuscatlán y San Vicente. En total casi 37 mil viviendas quedaron adicionalmente afectadas por la intensidad del nuevo terremoto y más de 170 mil nuevos damnificados quedaban sin techo.

Los primeros momentos fueron para el gobierno una demostración de autoridad centralizada que se vio sobrecargada ante la crítica nacional e internacional. Esta etapa queda muy bien representada con la ayuda llevada personalmente por el ministro del Interior a Santiago Nonualco, insuficiente ante la demanda, dramatizada al máximo por el apareamiento de un paquete que incluía un zapato izquierdo de mujer. La prensa escrita ridiculizó este incidente, muestra de inoperancia y desprecio al dolor ajeno. Una llamada segunda etapa, plan «Pueblo Valiente» ofreció a cada una de las familias mil 500 colones, herramientas y materia-

Infraestructura física dañada o destruida, derrumbes, fallecidos, lesionados y damnificados provocados por el terremoto del 13 de febrero de 2001.

Departamento	Edificios públicos dañados	Viviendas dañadas	Viviendas destruidas	Personas soterradas	Derrumbes	Escuelas dañadas	Iglesias dañadas	Hospitales dañados	Unidades de salud dañadas	Otros centros de salud
La Paz	4	705	14.491	12	19	5	19	1	8	
Cuscatlán	41	3.562	14.954	47	25	2	25	1	12	
San Vicente	4	3.868	6.936	37	3	-	6	1	9	
San Salvador	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Morazán	3	16	-	-	-	3	-	-	-	
Cabañas	-	248	254	-	-	-	-	-	-	
Chalatenango	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
Usulután	-	-	20	-	-	-	-	-	3	
San Miguel	3	29	19	-	2	-	-	1	-	
TOTAL	55	8.428	36.674	97	49	10	50	5	36	

todo el proceso de edificación de las viviendas. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en capacitarlos para que sus edificaciones mantengan unos mínimos de seguridad, ya que éstos han perdido las normas tradicionales de construcción en adobe y ahora las técnicas para adobe y ladrillo están confundidas.

No debemos desechar entonces el adobe para la construcción de nuestras viviendas. Con el adobe las casas son mucho más frescas, más agradables, más baratas y mucho más acordes con nuestra cultura y nuestra historia.

Sobre la legislación encontramos un intenso debate público, a propósito de la normativización del uso del suelo. El ejemplo más significativo en estos momentos es la tragedia ocurrida en las Colinas I y II de Santa Tecla en el departamento de la Libertad. La discusión estriba en dilucidar responsabilidades por parte de la empresa constructora por construir en zona de alto riesgo, obviando el traído y llevado factor de mala suerte con el que frecuentemente se eluden responsabilidades.

En todo caso una conclusión común es la necesidad de una ley de ordenamiento territorial que estudie integralmente el espacio nacional y que tenga en cuenta los aspectos sismológicos, geológicos, hidrológicos, etc. Sin embargo, no basta con escribir

una ley que ordene el suelo para las distintas actividades humanas, es necesario su estricto cumplimiento por todos los ciudadanos. El Estado y los gobiernos locales deben velar por los ciudadanos en vez de apoyar acciones cortoplacistas y de rentabilidad inmediata de los constructores, como parece haber ocurrido en el caso de la tragedia de Santa Tecla.

Salud

Los antecedentes en el área de salud para la sociedad salvadoreña son nefastos ya que varios acontecimientos diezmaron la salud de los salvadoreños en el año 2000. Desde mayo una epidemia de dengue hemorrágico demostró las limitantes de la población salvadoreña para la prevención de la propagación de mosquitos y zancudos. Los niños y las niñas fueron los más sensibles a una enfermedad que acabó con la vida de unos treinta niños. La epidemia desatada menguó gracias a la ayuda de especialistas internacionales, principalmente cubanos, que llegaron al país a realizar tareas contrarias a la propagación de los zancudos transmisores de la mortal enfermedad.

En noviembre, cuando todavía nos encontrábamos preocupados por la salud de nuestros niños más de cien personas, la mayoría alcohólicos, morían por la ingesta de alcohol adulterado.

Finalmente no se averiguaron las circunstancias exactas que permitieron la distribución de alcohol no apto para el consumo humano. En todo caso se develó la ineficiencia de las instituciones encargadas del control alimenticio en el país; y por último, días antes del terremoto del 13 de enero, el ministerio de Salud decretaba la emergencia ante una nueva epidemia, esta vez, de rotavirus. Los niños y las niñas eran otra vez los principales afectados por diarreas, vómitos y deshidratación con posibilidad de fallecimiento en caso de dejar avanzar la enfermedad. En este caso como las demás, las medidas preventivas son las más eficaces; de hecho las recomendaciones demandaban, algo tan simple, lavarse las manos habitualmente y desinfectar los alimentos con sumo cuidado.

La incidencia del rotavirus, del dengue hemorrágico así como las muertes por alcohol adulterado muestran una situación extrema en los niveles más bajos de la calidad de la higiene y del control alimenticio de la sociedad salvadoreña, en especial de las capas más bajas de la población.

Tras los terremotos del 13 de enero y febrero lo que más destacó inmediatamente fueron los daños a la infraestructura de salud del país. Según los datos oficiales el primer terremoto dañó finalmente 19 hospitales y 75 unidades de salud a los que se añaden 12 en



\$ 1,800 millones en daños y pérdidas



El Salvador, 13 de Enero de 2001

mendaciones iban desde comenzar inmediatamente hasta intercambios con otras escuelas o duplicación de turnos para no ocupar las aulas más peligrosas.

Tras el segundo terremoto del 13 de febrero con el colapso de una escuela en Candelaria, Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, se suspendieron las clases. Esta escuela privada construida con adobe había sido evaluada con bandera amarilla, pero la fuerza del segundo seísmo provocaron su desplome, murieron una maestra y ocho niños de kinder. Tras este segundo terremoto el 80 por ciento de las escuelas de la zona central del país fueron declaradas inutilizables.

El ministerio para reanudar las clases compartió responsabilidades con toda la comunidad educativa. Para la continuación del ciclo escolar se hacía necesaria la aprobación en asambleas de padres de familia de cada una de las instituciones educativas, tanto en las es-

cuelas públicas como privadas. Hasta el momento así es como se han reanudado las clases excepto en el Gran San Salvador, donde están suspendidas hasta nuevo aviso al comprobarse la activación del sistema de fallas locales. La ocurrencia de sismos con epicentros al sur de San Salvador provocó el cierre de las escuelas públicas y privadas, fueron suspendidas las clases las dos últimas semanas del mes de febrero.

El ministerio de Educación tenía para este año una agenda de proyectos que pretendían el desarrollo del sistema educativo salvadoreño, pero debido al gran impacto de los sismos sufrirá modificaciones. Varios proyectos aprobados tendrán que esperar la construcción de nuevas escuelas en distintas localidades. Se tenía previsto abrir 2 mil 800 nuevas secciones, ahora tendrán que esperar. Los bonos a la excelencia para la capacitación de docentes y la entrega de materiales educativos a las escuelas quedaron anulados hasta previo

aviso. Por su parte el ministerio de Educación iba a absorber mil 200 profesores desempleados, pero tendrán que esperar una nueva oportunidad.

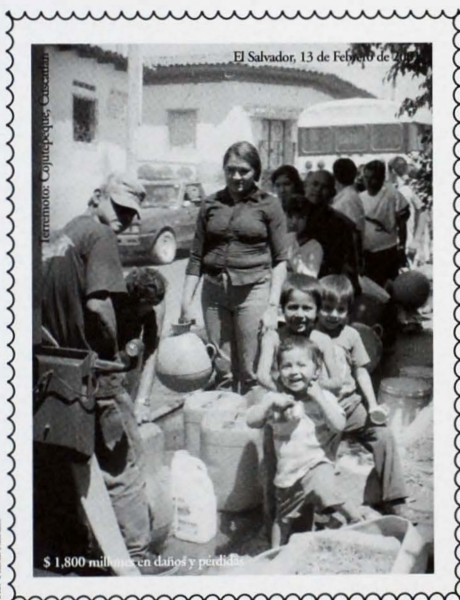
El dinero que proviene de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Banco Mundial, se destinarán en esta ocasión a la rehabilitación de escuelas, la construcción de mil 90 aulas provisionales y la construcción de los centros educativos que quedaron destruidos por los terremotos.

Sin embargo, el ministerio ha considerado conveniente continuar con otros grandes proyectos como el programa de incentivos a los maestros, que incluyen el bono a la ruralidad y el reconocimiento a la labor de las escuelas. También continuarán las asesorías pedagógicas, los programas de Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), la Educación a Distancia y la Educación de Adultos. También contaremos este año con el programa Escuelas Abiertas, que iniciará a mediados de marzo.

En un país de alta sismicidad como el nuestro, deberán incluirse permanentemente en las escuelas programas para crear una verdadera cultura sísmica en todos los ciudadanos. Estos programas deben incidir en el conocimiento de las medidas de prevención incluso en la vida cotidiana para que los fenómenos naturales no se conviertan en catástrofes.

— Inmigración

El Salvador tiene un 20 por ciento de su población, aproximadamente 2 millones de salvadoreños, en el exterior. Un gran desastre como el ocurrido tras los terremotos puede significar un incremento de la migración en dos distintos sentidos el interno, desde el ámbito rural a la capital, y el internacional, hacia el extranjero, a tierras estadounidenses principalmente. Ante el desastre, la prime-



ra medida por parte de las autoridades estadounidenses fue detener las deportaciones de salvadoreños desde el 13 de enero después del sismo con el fin de evitar mayores consecuencias.

Durante la emergencia, se buscó la complementación con otras medidas que beneficien al conjunto de inmigrantes salvadoreños, y en especial entre 100 y 400 mil indocumentados, según cifras oficiales. Peter Romero, Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha recomendado al gobierno norteamericano dar residencia temporal a los indocumentados. Una de las opciones que se tenían era el otorgamiento TPS, Estatus de Protección Temporal, que se otorga en caso de guerra o desastre y que finalmente fue aceptado durante un año y medio.

Asimismo, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) anunció la ampliación de la sección 245(i) de la Ley de Inmigración en el mismo sentido.

Esta medida va a beneficiar a los indocumentados salvadoreños residentes en los Estados Unidos garantizando la estancia «legal» en el país; lo cual tiene implicaciones directas en la economía salvadoreña. No olvidemos que durante el año 2000 se estimó que los salvadoreños migrantes enviaron remesas por mil 750 millones de dólares. Los «hermanos lejanos» ya hace tiempo que son importantes para el equilibrio de la economía nacional y es obvio que serán necesarias para la reconstrucción; sin embargo, la migración al Norte es un arma de doble filo. Ton Oomen, representante de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hablaba en esos días de emergencia que las remesas son muy interesantes para quienes las reciben, pero también hacen más tranquila la vida a los políticos ya que la presión para cambiar la



situación no es tan grande, ayudando a camuflar la realidad del país. Estas palabras las decía a propósito del olvido en el que se encuentra el sector agrario nacional.

Por otra parte, y hablando de migración interna, de carácter rural-urbana, el Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, advirtió de las posibilidades del incremento de la migración interna dirigida hacia la capital del país. Habida cuenta de que las zonas rurales han sido las más afectadas por los terremotos podría darse el caso de un traslado hacia San Salvador, ampliando los cinturones de pobreza de una ya muy desor-

denada capital del país; por ello y por otros motivos hay que pensar en soluciones convenientes e integrales que garanticen la reconstrucción rápida y eficaz y la dignidad de los afectados por los terremotos.

Por los mismos motivos de incremento de la pobreza se puede prever un aumento de los migrantes internacionales, en especial hacia los Estados Unidos; en este sentido, el Foro de Migrantes hizo público un comunicado con el fin de llamar la atención hacia el respeto de los derechos humanos de los migrantes salvadoreños en situación irregular en distintos países.